

## 18. LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA

1. La transición política
2. La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías
3. Los gobiernos democráticos y la integración en Europa
4. La comunidad de Castilla y León
5. Cambios económicos, sociales y culturales

### Introducción

En 1975 moría el general Franco, que había gobernado el estado de manera dictatorial durante casi cuarenta años. El paso de un régimen autoritario a otro democrático, conocido como *transición democrática*, se produjo de una manera pacífica por la vía del pacto, la tolerancia y la reconciliación. La aprobación en referéndum de la Constitución de 1978 dotó a España de un sistema democrático con la *monarquía parlamentaria* como forma de gobierno. El país se incorporaba así, con un notable retraso, al conjunto de las democracias occidentales. A partir de aquel momento se iniciaba uno de los períodos de libertad y de democracia más largos, intensos de la historia contemporánea española.

### 1. La transición política

Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Según lo previsto en la Ley de Sucesión, asumió la jefatura del Estado el rey Juan Carlos I. Desde el momento de su subida al trono, el monarca mostró una voluntad inequívoca de instaurar un sistema democrático en España. Sin embargo, el cambio político encontró numerosas dificultades y la resistencia de los sectores más conservadores. En primer lugar el rey no pudo elegir el gobierno que deseaba, sino que debió aceptar el último gobierno franquista presidido por Carlos Arias Navarro. A pesar de que se incorporaron ministros reformistas como Areilza y Fraga, el gobierno de Arias no comenzó a aplicar las reformas que se le demandaban y el rey forzó al presidente a dimitir en julio de 1976.

El rey designó a continuación como presidente del gobierno a Adolfo Suárez, uno de los ministros de Arias, que ocupaba la secretaría general del Movimiento. El nombramiento de este joven político levantó mucha desconfianza entre los sectores reformistas y la oposición, que no consideraban a Suárez capaz de dar el paso hacia la democracia.

Los meses posteriores a la muerte del dictador se caracterizaron por una gran movilización política y social reclamando la democratización. Se sucedieron las huelgas y los actos de protesta que fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad. En la escena política y en la opinión pública aparecían diferentes bloques: por un lado, la oposición democrática, que buscaba la ruptura con el régimen anterior y seguía en la ilegalidad y en la

clandestinidad; por otro, dentro del franquismo figuraban los partidarios de que el rey mantuviera la dictadura como heredero del régimen franquista: eran los *continuistas*, denominados popularmente *el búnker*. Junto a estos, dentro de la Administración y la clase política del franquismo aparecían grupos reformistas o evolucionistas, partidarios de reformas y de la concesión lenta de libertades ciudadanas.

La difícil situación que vivió el país en 1977 puso en peligro la transición a la democracia. Así, grupos extremistas iniciaron una campaña de desestabilización del nuevo régimen. La extrema derecha asesinó en enero a cinco *abogados laboristas* vinculados al PCE y al sindicato CC.OO. en lo que pasó a la historia como *la matanza de Atocha*. Las manifestaciones por la muerte de estos abogados fueron multitudinarias y permitieron la salida masiva a la luz pública de la organización del PCE. Esos grupos de ultraderecha, que se presentaban como *Guerrilleros de Cristo Rey*, estaban financiados por funcionarios franquistas y contaban con la permisividad de un sector de la policía en sus continuos atentados contra librerías y contra instituciones sociales que se habían manifestado a favor de un sistema democrático y autonomista, recurriendo a veces al asesinato de militantes antifascistas. En el otro extremo del arco político, tanto ETA (grupo terrorista independentista vasco) como los GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre, grupo surgido en 1975, de confusos orígenes y aparentemente vinculado a la extrema izquierda) secuestraron a militares y asesinaron a miembros de la policía y de las instituciones del Estado. El Gobierno intentó salvar la situación y no se dejó arrastrar por las provocaciones del terrorismo extremista.

El gobierno de Adolfo Suárez evitó la ruptura, pero llevó a cabo una serie de reformas que acabaron con el régimen franquista y abrieron el camino hacia un sistema democrático. El primer paso fue la *Ley de Reforma Política*, aprobada por una gran mayoría de la población española en referéndum el 15 de diciembre de 1976. La reforma implicó la legalización de los partidos políticos, incluido el PCE, y la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes en junio de 1977. Resultó vencedora la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, mientras que el Partido Socialista (PSOE) quedó como el segundo partido con más representación parlamentaria. Otros grupos con importante presencia en el Parlamento fueron el Partido Comunista, Alianza Popular y los partidos nacionalistas vascos y catalanes.

A partir de ese momento, gobierno y oposición afrontaron los principales problemas a los que se enfrentaba el país:

- Se llegó a un acuerdo para poner en marcha un sistema político que concediera autonomía a las diferentes regiones españolas. Entre 1977 y 1983 se creó el actual mapa autonómico con 17 autonomías.

- La grave crisis económica llevó a los partidos y fuerzas sociales a firmar los *Pactos de la Moncloa* el 27 de octubre de 1977, un acuerdo sobre la política económica y una tregua en las reivindicaciones sociales de los sindicatos hasta la elaboración de una constitución.

- Se redactó una constitución plenamente democrática, que establecía la soberanía popular y el sufragio universal. El texto contenía una amplia declaración de derechos y libertades, y establecía la división de poderes. La Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum por amplia mayoría en toda España el 6 de diciembre de 1978.

## 2. La Constitución de 1978 y el Estado de las autonomías

La principal tarea que abordaron las primeras Cortes democráticas fue la redacción de una constitución que sentaría las bases del funcionamiento del sistema democrático. La redacción del texto corrió a cargo de una comisión, la llamada *ponencia constitucional*, integrada por siete diputados de los principales grupos del parlamento. El borrador se concluyó en poco tiempo gracias a que los integrantes de la ponencia mostraron, a pesar de sus diferencias ideológicas, capacidad de diálogo y deseos de llegar a un acuerdo.

El 31 de octubre la Constitución fue votada favorablemente por la casi totalidad de los diputados y senadores. El 6 de diciembre de 1978 fue aprobada en referéndum por casi el 88 por cien de los votantes. Dos días después de la Navidad, el rey la reconocía en sesión conjunta del Congreso de los Diputados y el Senado. Por primera vez en la historia contemporánea española, había una constitución aceptada por la inmensa mayoría de las fuerzas política.

La Constitución española tiene dos partes fundamentales: una en la que se establecen los derechos y deberes de los españoles, y otra en la que se diseña la organización política del Estado. A diferencia de otras constituciones occidentales, la española establece, además de las libertades fundamentales, otros derechos de carácter social.

En la Constitución se dice que los ciudadanos gozarán de libertad de expresión, asociación y reunión, y tendrán derecho a la participación política, a la intimidad y al honor. No podrán sufrir discriminación por raza, religión u opción sexual. Se establece explícitamente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Los derechos de carácter social son, entre otros, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna y el derecho de los jóvenes a la participación en los asuntos públicos. Todo ello no significa que el Estado deba proveer a todos los ciudadanos de estos bienes de manera directa, sino que deberá tomar las medidas oportunas para que estos derechos se puedan conseguir.

Respecto a la organización política del Estado, éste se define como democrático y social, bajo la forma de una monarquía parlamentaria en la que los poderes de la Corona se limitan a cuestiones meramente representativas. Se establece la división de poderes -legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo recae en unas Cortes Generales integradas por dos cámaras (el Senado y el Congreso de los Diputados), y en los parlamentos autonómicos. El presidente del gobierno, máximo representante del poder ejecutivo, es elegido por el Congreso de los Diputados.

Después de siglos de tradición centralista del Estado, si exceptuamos el breve paréntesis de las dos repúblicas, se crea en España un sistema político descentralizado. Como señala la Constitución, en este nuevo Estado tiene cabida el autogobierno de las regiones y nacionalidades, regulado por los *estatutos de autonomía*. En consecuencia, se establecieron dos vías para culminar la autonomía: una *rápida*, inicialmente destinada a las nacionalidades consideradas históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), y otra *lenta* destinada al resto de las regiones, que alcanzarían las competencias de manera más pausada. Este proceso ha conducido a un mapa político en el que las diecisiete comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, obtienen un alto grado de autonomía política y administrativa.

### 3. Los gobiernos democráticos y la integración en Europa

#### 3.1. Los gobiernos de UCD

Una vez aprobada la constitución se disolvieron las cámaras y se convocaron elecciones generales en 1979, que volvió a ganar la UCD. Sin embargo, la crisis económica, las críticas de la oposición, la dificultad de estructurar el Estado de las Autonomías y la división interna de la UCD provocaron la dimisión de Suárez a comienzos de 1981. El 23 de febrero de 1981, en la sesión parlamentaria en la que se votaba a Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor a la presidencia, se produjo un *intento de golpe de Estado* organizado por un grupo de militares. La actuación del rey fue decisiva para que el golpe no triunfase, evitando así la *involución*. El gobierno de Calvo Sotelo tuvo que afrontar el agravamiento de la crisis económica y un aumento de la actividad terrorista. Su decisión más importante fue el ingreso de España en la OTAN en 1981.

#### 3.2. Los gobiernos del PSOE

El Partido Socialista ganó las elecciones de 1982 por mayoría absoluta. Hasta 1996 se sucedieron cuatro legislaturas con gobiernos presididos por Felipe González. Ha sido la etapa más larga de gobierno de un partido en toda la historia democrática de España. Los principales problemas con los que se enfrentaron los gobiernos socialistas fueron los siguientes:

- En 1982 la situación política española era muy inestable. La democracia estaba poco asentada y existía el peligro de un nuevo golpe de Estado militar. Durante los gobiernos socialistas la democracia se asentó definitivamente en nuestro país.

- El terrorismo de ETA causaba decenas de asesinatos anuales. Además nació otro tipo de terrorismo, el de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), destinado a combatir a ETA con sus mismos métodos y en los que se vieron implicados miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno socialista. Los gobiernos socialistas consiguieron ampliar la cooperación antiterrorista de Francia y los atentados fueron disminuyendo.

- La economía en 1982 estaba en una grave crisis. La inflación era muy alta, el doble de la media europea, y el desempleo alcanzaba el 16,5 %. Los gobiernos socialistas aplicaron una dura política de ajuste y de reconversión industrial que logró estabilizar la inflación y potenciar el crecimiento. Sin embargo, el desempleo siguió creciendo hasta situarse en el 24 % en 1993.

- Otro problema era el aislamiento de España en la escena internacional. La presencia internacional española aumentó mucho desde 1982. En 1986, España se incorporó a la Comunidad Económica Europea. Más tarde intervino en la resolución de conflictos internacionales como la guerra del Golfo, el conflicto entre los palestinos e Israel y las guerras de la antigua Yugoslavia.

- La etapa final de los gobiernos socialistas estuvo marcada por el estancamiento económico y por el estallido de escándalos de corrupción y de abuso de poder que crisparon la escena política española. Diversos altos cargos del gobierno se vieron implicados en ellos.

### 3.3. Los gobiernos del Partido Popular

En 1996 el Partido Popular ganó las Elecciones generales y su líder, José María Aznar, fue elegido nuevo presidente del gobierno. Entre 1996 y 2004 se sucedieron dos legislaturas marcadas por los gobiernos del PP.

Durante su primera legislatura, el PP no contó con mayoría absoluta, por lo que pactó con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. En el año 2000 el PP volvió a ganar las elecciones, pero esta vez con mayoría absoluta. Durante la primera legislatura la política económica del PP controló la inflación, disminuyó el déficit público y el desempleo, y redujo el sector público a través de la privatización de empresas públicas. España consiguió cumplir los requisitos para ingresar en la moneda única europea, el euro. Sin embargo, la crisis económica que comenzó en 2001 provocó un nuevo crecimiento de la inflación y del desempleo. Los principales problemas en política interior fueron el terrorismo y la inmigración.

- El terrorismo continuó activo durante estos años. En 1998 ETA declaró un tregua unilateral, que rompió al poco tiempo. No obstante el aumento de la cooperación internacional y la firma del *pacto antiterrorista* entre PP y PSOE supusieron considerables avances en la lucha antiterrorista. La lucha contra ETA se amplió también a su entorno político mediante la aprobación de la *Ley de Partidos* y por la intensa actividad judicial contra los intereses económicos de la banda terrorista. Sin embargo, tras los *atentados de las Torres Gemelas* de Nueva York en septiembre del año 2001 el terrorismo islámico fundamentalista ha tomado fuerza en Europa, afectando de forma dramática a España con los sucesos del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

- La inmigración ilegal aumentó de forma inquietante y las políticas adoptadas para reducirla no fueron suficientemente efectivas.

- La política exterior del PP mantuvo la implicación en la escena internacional. En 1997 España se incorporó a la estructura militar de la OTAN. También participó en las crisis de Kosovo y de Afganistán. Sin embargo su apoyo a la coalición internacional que promovió la Guerra de Irak fue muy contestada por amplios sectores de la opinión pública.

## 4. La comunidad de Castilla y León

El despertar de una conciencia regional castellano-Leonesa se manifestó desde el principio de la transición. Pocas semanas después de la muerte de Franco, en 1975, se fundaron varias asociaciones culturales, como la Alianza Regional de Castilla y León o el Instituto Regional de Estudios Castellano-leoneses, que reivindicaban la democracia para el país y la autonomía política para la región. Los primeros actos y manifestaciones tuvieron como centro simbólico de rebeldía a Villalar. En este pequeño pueblo, situado a unos cuarenta kilómetros de Valladolid, los comuneros fueron derrotados por las tropas imperiales el 23 de abril de 1521. El grito más coreado en estas manifestaciones era "libertad, amnistía y estatuto de autonomía". En 1977 se concentraron unas 20.000 personas, y en 1978 la cifra se disparó a 200.000.

Paralelamente a estos acontecimientos se iniciaron los trámites legales y políticos para acceder a la autonomía. En 1977, tras las primeras elecciones democráticas, se elaboró un primer borrador de Estatuto, en el que se pusieron de manifiesto algunas diferencias sobre la composición territorial de la región y la sede central de las instituciones. El 13 de junio de 1978 se creó el Consejo General de Castilla y León, del que formaban parte once provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Logroño y Santander. Estas dos últimas se convirtieron más tarde en las comunidades autónomas uniprovinciales de La Rioja y Cantabria.

Siguiendo las normas del artículo 146 de la Constitución Española, la asamblea de parlamentarios y diputados provinciales se ocupó de redactar el texto del Estatuto, que fue finalmente aprobado por el Congreso de los Diputados el 22 de febrero de 1983. Nació así la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cuyos órganos principales de gobierno son la Junta, con el presidente de la comunidad y sus consejeros a su cabeza, y las Cortes de Castilla y León. Desde entonces ha habido seis consultas electorales regionales. En la última, celebrada en 2003, el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta.

La situación económica y demográfica de Castilla y León ha variado en los últimos años. La tendencia general hacia la emigración se ha reducido al no existir nuevas expectativas de trabajo en otras regiones. Por otra parte, muchos emigrantes han vuelto a sus lugares de origen ante la pérdida de sus puestos de trabajo. Consecuencia de todo esto ha sido un apreciable crecimiento demográfico en la región, pero no debido a un aumento de la natalidad, sino a la vuelta de estas personas. La población muestra síntomas preocupantes de envejecimiento por el descenso de la natalidad y el lógico aumento de la esperanza de vida.

## **5. Cambios económicos, sociales y culturales**

La sociedad española actual es semejante, en sus rasgos fundamentales -hábitos de consumo, de ocio, espíritu de tolerancia, calidad de vida, utilización de los servicios públicos, entorno urbanístico, conciencia social ante los problemas de nuestro tiempo-, a las sociedades occidentales más desarrolladas. Ello no significa que no existan dificultades, entre las que destacan las bolsas de pobreza y marginación, los desequilibrios territoriales y los problemas medioambientales.

Durante la etapa de la democracia la economía española se ha modernizado, produciéndose un importante crecimiento de todas las magnitudes más representativas: PIB, exportaciones, aumento de los servicios, etc. La renta per cápita se ha multiplicado. Uno de los principales problemas sociales y económicos es la alta tasa de paro laboral. Uno de los rasgos más preocupantes es que un gran porcentaje de los parados (más del 60%) tienen menos de 25 años, a lo que hay que añadir la mayor incidencia del paro femenino.

El aumento del nivel de vida se ha realizado a través de una oferta amplia de servicios públicos y de seguridad social, y mediante la mejora de los niveles de consumo. El dinero que dedica cada familia a la compra de bienes y servicios casi se ha triplicado. El porcentaje de ingresos familiares empleado en actividades de ocio o en gastos no esenciales ha crecido mucho.

Todo ello supone que una parte importante de la población tiene acceso al consumo con niveles semejantes a los de la media de los ciudadanos de la Unión Europea. . Junto a esta realidad positiva, existen bolsas de pobreza formadas, sobre todo, por parados de larga duración y grupos marginales, entre ellos numerosos inmigrantes de países del norte de África.

La sociedad española ha modificado su modo de vida y su mentalidad. España ha pasado a ser uno de los países del mundo con menor crecimiento natural de la población. Ha cambiado el concepto de familia, al tiempo que se ha reducido mucho su tamaño. Cada vez hay más matrimonios con un solo hijo e incluso sin ninguno, y han aumentado las llamadas familias monoparentales (uno o varios hijos con un solo padre o madre). Ha avanzado el matrimonio civil y se ha normalizado el divorcio, fórmula legal para disolver un vínculo, el matrimonio, que parecía indisoluble en tiempos no muy lejanos. Las costumbres se han liberalizado y se ha implantado la permisividad en el ámbito de las relaciones personales. Ha cambiado la actitud ante la religión: se ha pasado de una religiosidad tradicional, donde la asistencia a actos litúrgicos era una práctica exigible socialmente, a una total libertad personal ante el hecho religioso.

Otro cambio destacado es la irrupción de las mujeres en ámbitos que les estaban tradicionalmente vedados. Hoy en día, el número de mujeres que acude a la universidad supera al de varones. Se ha alcanzado la igualdad de derechos entre ambos sexos en el ámbito legal. Pese a todo, todavía no existe una igualdad efectiva, como puede observarse en los niveles de renta de los dos sexos, en los puestos de responsabilidad social que ocupan y en múltiples actividades cotidianas.